

Nombre: Salvador Alejandro PERÉZ CONTRERAS
Grado Académico: Doctor en Derecho
Adscripción institucional: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
Correo electrónico: alepecon@hotmail.com

LA RACIONALIZACIÓN DEL VOTO EN LA REVOCACIÓN DE MANDATO

SUMARIO: *I. Introducción. II. Racionalización del voto. III. Revocación de mandato. IV. Tutela Procesal. V. Fuentes de Consulta.*

Resumen. Dentro del presente artículo, se externara una breve reseña propia, dentro del cual se analizará el tema de la racionalización del voto en la revocación de mandato, en donde la pregunta medular es ¿a la fecha por quien votaste, sigue siendo la opción política que corresponde a tus intereses?

Palabras clave: racionalización, voto, revocación de mandato.

“Uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados...”

Milton Friedman

I. Introducción

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía.” (Simón Bolívar).

Por esa razón, el objeto principal del presente artículo consistirá en realizar una reseña de la importancia de la nueva figura que se encuentra pendiente de aprobación por el Senado, consistente en la revocación de mandato.

Con la revocación de mandato, se le dotaría de poder a los ciudadanos, de premiar o castigar al gobierno actual, brindado a estos, el poder para que puedan replantearse, si siguen o no de acuerdo con el su mandato.

Para poder adentrarnos al tema, es importante conocer sus conceptos, puesto que estos nos darán una mejor pauta para entender el tema,

II. Racionalización del voto.

La Real Academia Española, nos establece que la racionalización es una acción y efecto de racionalizar (Real Academia Española, 2019).

La célebre teoría de la racionalización de Max Weber es el argumento original contra la democracia industrial. El título de este ensayo implica un revés provocativo a sus conclusiones. Weber definió la racionalización como la creciente función del cálculo y el control en la vida social, una tendencia dominante que él llamó “la jaula de hierro” de la burocracia.¹ Así, la racionalización “democrática” es una contradicción en términos.

Por otro lado, Dolores Santamarina, denomina a la racionalización como el proceso sociocultural moderno, por el cual la racionalidad se transforma en el *modus operandi* de la sociedad capitalista. Asimismo, menciona que el proceso de racionalización, se instala progresivamente en los individuos una concepción de la virtud asociada a la búsqueda de la ganancia, del éxito y de la eficiencia, junto al autodisciplinamiento, la austeridad del presente en vista a la recompensa futura y el aprovechamiento máximo del tiempo (Santamarina, 2019).

Ahora bien, es necesario hacer una diferencia entre lo racional y lo razonable. Lo racional busca conocer las cosas para saber cómo podemos arreglárnoslas y lo razonable, intenta comunicarse con los sujetos para arbitrar junto con ellos el mejor modo de convivir humanamente. Todo lo racional es científico.

Entonces, se entiende como racionalización del voto, como aquello que se persigue como ciudadano y cual es medio político, para lograr el objetivo. El voto razonado va encaminado a la reflexión y elección de posibilidades que como ciudadano se puede tener, dado el espectro político en el que nos encontramos. Se habla de elegir bien, entre las posibilidades, la que mejor convenga.

¹ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trad. T. Parsons, (New York: Scribners, 1958), pp. 181-182.

III. Revocación de mandato

La revocación de mandato conlleva, desde su propia concepción, del latín, *revocare*: anular una concesión o mandato, y del vocablo en inglés *recall*, que significa regulación de procedimiento institucional prevista en concepciones de democracia directa.

Se entiende como un instrumento de la democracia participativa, en el que antes de que se cumpla el periodo para que un gobernante quien fue originalmente electo, pueda ser removido, restituido.

Dentro del estado mexicano, son 31 entidades federativas, que contemplan esta figura, dentro de las constituciones locales, se encuentra una atribución que le corresponde a los diputados para efectos de llevar a cabo la revisión de la actuación que llevan a cabo los presidentes municipales o cualquier integrante del ayuntamiento, para efecto de que las dos terceras partes del Congreso del Estado puedan revocar el mandato de aquel representante popular de un municipio. Sin embargo, a nivel federal este instrumento aún no ha sido incorporado.

Desde hace unos meses, este tema ha causado controversia, ya que en meses pasados la cámara de diputados a probo la nueva reforma constitucional, en materia de consulta popular y revocación de mandato, en la que esta aplicaría solo para el Presidente de la Republica.

Por ejemplo, el Presidente de la Republica Mexicana, es electo para un periodo de seis años, con esta nueva figura, antes de que su sexenio termine, por la vía de las urnas, el lectorado podría pronunciarse, en el sentido de que este continúe o no; a esto se le estaría llamando revocación de mandato.

Cabe mencionar, que la presente propuesta, aún no ha sido aprobada por completo, pues aún se encuentra pendiente en el Senado de la Republica.

Aunado a esto, dentro de latino américa varios países contemplan esta figura, pero al igual que en México, esta solo es en el ámbito estatal y solo son tres países, que o contemplan a nivel presidencial como lo son Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En Ecuador, para que se pueda llevar a cabo este procedimiento, se requiere la petición del 15% del padrón de los electores, durante el primer año o el último año del ejercicio, en un período de 4 años, y aquí la Comisión Nacional Electoral es quien la revisa, y a la vez se siguen ciertos requisitos, siendo fundamental el relativo a que para que se pueda revocar el cargo se pide una mayoría absoluta, lo cual es muy difícil.

Respecto a Bolivia, en este caso para la solicitud se requiere el 25% del padrón nacional—incluyendo el 20% del de cada departamento—, se puede solicitar a mitad del mandato y se excluye el último año, aquí se habla de un período de ejercicio del cargo de 6 años.

Y, Venezuela, al igual que Bolivia, la Comisión Nacional Electoral es quien realiza el ejercicio de revocación de mandato, sin embargo, uno de los requisitos es que haya más votos a favor de los que votaron por quienes quieran revocar el mandato, lo interesante es que se exige un techo mínimo de electores en la votación y éste debe ser igual o superior al 25% de los inscritos en la lista nominal.

Anudando a esto, el artículo 39 de la Constitución Federal establece que: —la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y tienen en todo el tiempo el inalienable derecho para modificar o revocar una forma de gobierno—, por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué será entonces una forma de gobierno?

Como se mencionó con antelación, en nuestro país todos los estados cuentan con el concepto de revocación pero la del tipo legislativo; por ejemplo, el caso de Chihuahua se tiene el procedimiento de revocación de mandato para el gobernador, y también se sigue una serie de requisitos, aquí es el que se solicite por el 10% de los electores, sin embargo no se ha realizado ningún ejercicio relacionado a este.

A veces, aunque los procedimientos estén establecidos en la Constitución, estos pueden resultar ilusos, esto, si no se establecen las reglas y las reglas y las bases para llevarlo a cabo.

Ahora, bajo este esquema que se tiene hoy en día, desde luego lleva a hacer una reflexión interesante sobre lo que es la iniciativa que se tiene en el ámbito federal, pues permite también ver sus pros y sus contras, por ejemplo, el hecho de que en el ámbito federal se cuente con un esquema o un escenario en el cual se lleva a cabo una consulta a la mitad del mandato y sobre todo que se pueda desarrollar el día de las elecciones.

Este tipo de ejercicios deben ser incentivados por los ciudadanos, que no sean los

mandatarios, los servidores públicos quienes las impulsen, al ser los ciudadanos quienes estamos observando bajo el tamiz de la transparencia y la rendición de cuentas que un servidor público realmente esté cumpliendo con sus actividades, sobre todo porque hoy en día con los Derechos Humanos de la cuarta generación, en el cual las redes sociales, las nuevas tecnologías nos brindan la oportunidad de tener una comunicación impersonal e inmediata; sin embargo, destacó, debe ser una información que nos brinde certeza para en su momento poder tomar decisiones certeras y de esta manera tener la oportunidad para llevar a cabo este tipo de planteamientos que son muy necesarios para consolidar más nuestra democracia y el federalismo.

Lo fundamental es que las instituciones se fortalezcan desde lo local, dado que no se puede centralizar, porque si se centraliza se vuelve otra vez a escenarios del siglo XIX, en el cual la mayoría de las decisiones que se tomaron fueron precisamente ante esa lucha que se daba entre centralistas y federalistas en cuanto a la toma de decisiones.

¿Qué se requiere ahora?, se necesita la motivación y participación de cada uno de los ciudadanos para lograr una mejor, sobre todo por las crisis que se dan en las instituciones, respecto de aquellos a, quienes se pone en tela de juicio su actuar, por la crisis de legitimidad o la crisis de confianza, pues tenemos temas de inseguridad, de duda, de desigualdad social, la falta de cuestionamientos que no se da en la sociedad, y los desequilibrios que se están dando en el tema económico generan problemas, y los servidores públicos hoy en día están obligados a cuidar estos derechos de la ciudadanía.

En ese sentido, se debe participar, y ayudar a quien está subiendo al poder para que logre las expectativas que tienen hoy en día los ciudadanos, reiterando que este ejercicio debe venir de los ciudadanos hacia los servidores públicos, no del servidor público hacia el ciudadano.

Los ciudadanos asumen un rol de mayor participación en la toma de decisiones y desde luego el tema de la revocación de mandato bajo la idea que se está construyendo conlleva una tarea fundamental tan importante que representa el propósito de llevar a cabo la revocación de mandato.

A lo largo del tiempo, escuchado opiniones, discusiones, reflexiones sobre lo que corresponde a este tema, se decía que desde hace más de casi 100 años el primer estado que implemento esta figura en su Constitución fue el estado de Yucatán aproximadamente en 1938. Sin embargo, la actividad que se desarrolla hoy en día en

nuestra sociedad corresponde a lo que establece la propia Constitución General en el artículo 39, cuando señala que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y que el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho para modificar su forma de gobierno, en ese sentido, los ciudadanos están en una posición tan interesante frente al poder, esto es el saber cómo se conducen nuestros representantes populares ya sea en el ámbito ejecutivo, legislativo, judicial, pero principalmente en los dos poderes donde asume el ciudadano una mayor participación como en el ejecutivo: gobernador, presidentes municipales, como en el legislativo: diputados por las dos vías de mayoría y plurinominales.

Respecto a los pros y los contras de la revocación de mandato, señaló que desde el concepto mismo, que es anular el mandato a la posesión que se le dio al servidor público, representa a la luz de lo que establece el artículo 134 de la Constitución Federal, llevar a cabo actividades un servidor público que sean de impacto para la sociedad, esto es atender sus necesidades al mínimo vital, y generar condiciones de armonía y de paz social, en ese sentido señaló que ese mínimo vital son las necesidades prioritarias que tenemos como ciudadanos: seguridad, educación, vivienda, empleo, en sí el bienestar social.

Indicó que si se ve a la revocación del mandato desde esta concepción donde los ciudadanos pueden tomar la decisión de evaluar el desempeño que viene llevando a cabo el servidor público, también conlleva una responsabilidad del servidor público para efectos de que pueda cumplir con las expectativas de la ciudadanía, en ese precisó que qué mejor sería el hecho de saber o conocer cuál es la expectativa que tienen los ciudadanos frente al servidor público.

Mencionó que el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral habla de un concepto muy interesante: la razonabilización del voto, lo que implica que el día en las elecciones cuando se da el voto a un candidato se razona y ese razonamiento nuevamente se tiene que hacer a través del ejercicio de lo que corresponde evaluar a mi representante popular.

Señaló que esa evaluación es una doble responsabilidad tanto del ciudadano como del servidor público, por lo que no debe atenderse a venganzas políticas, al contrario es un trabajo de refrendo, y ese refrendo significa, que como ciudadanos nuevamente volvemos a razonar que el voto que le dimos a determinado servidor público implica asumir por parte de éste la gran responsabilidad de ver satisfechas las necesidades mínimas.

En diverso punto señaló que el marco legal que se tiene que reformar si bien va desde la propia Constitución, también debe reflejarse en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en ese sentido se cuestiona el ¿cómo se va a evaluar a un servidor público? se que está cumpliendo con los principios que establece la función para la cual se le está encomendando la tarea de representar a los ciudadanos.

En ese sentido refirió que se deben establecer las consecuencias o las implicaciones que conlleva el que se tenga que revocar, cuestionándose si ¿habrá responsabilidades? a lo que afirma que sí las habrá, indicó que incluso se puede llegar a un punto en el que la actividad que desempeña un servidor público no sea tan buena y que no cumpla con las necesidades de la población que lo lleve a un tema de responsabilidades y no se habla nada más de un tema de juicio político, sino también de una responsabilidad que en otras materias puede darse administrativa, penal, civil, de ahí que refirió son varias las implicaciones que esto puede generar.

Refirió también que el sistema anticorrupción nos lleva de la mano a la revocación de mandato, de ahí precisamente el hecho de que los ciudadanos atendiendo a este ejercicio tan importante que se viene construyendo con una iniciativa sea el hecho de que se encuentren las vías donde la ciudadanía pueda ejercer de manera directa una evaluación respecto de un servidor público, y este servidor público habrá de sentarse no en el banquillo de los acusados, pero si en la antesala de que su trabajo debe ser suficiente y basto para cumplir con las expectativas de los ciudadanos.

Indicó que el procedimiento que se debe establecer lleva precisamente a que establezcamos los mínimos para que se pueda llevar a cabo el ejercicio, no se trata de venganza política, es el hecho de que los ciudadanos hoy en día debemos estar participando de manera más directa, en ese orden de ideas indicó que ya se tienen las experiencias que se han suscitado en otros países, pero que en el ámbito de nuestra democracia en nuestro país representa un gran reto para consolidar un federalismo, un federalismo con transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, refirió que Michoacán estuvo durante los últimos años en el ojo del huracán, por lo que se necesita que los ciudadanos participen para generar ideas, reflexiones, propuestas que nos lleven a alimentar y enriquecer las iniciativas que nuestros representantes populares hoy en día están haciendo renacer desde el propio seno en el Congreso.

Mencionó que eso debe ayudar a todos los ciudadanos para generar una participación activa, la democracia hoy en día exige y nos necesita que participemos por todos los canales institucionales, las manifestaciones que se dan en la vía pública son válidas pero esas manifestaciones nos llevan a una crisis de legitimidad y una crisis de confianza, pues si bien en ellas los ciudadanos participan y expresan atendiendo al artículo 6° de la Constitución su libertad de expresión, todo tiene límites y los límites son precisamente encontrarse en los parámetros mínimos que nos establecen la propia ley: el respeto a la autoridad, el respeto a la ley.

En ese sentido refirió que tenemos que trabajar para ello, y que eso desde luego conlleva a que nuestros instrumentos jurídicos generen la confianza de los ciudadanos para lograr abatir estos reclamos sociales que hoy en día se tienen.

Puntualizó que la revocación de mandato es necesaria porque si bien ya está en la Constitución, se tienen que generar los instrumentos para llevarla a cabo, enfatizó que no se trata de venganzas políticas, sino que es una evaluación de transparencia y rendición de cuentas para los propios ciudadanos.

En ese sentido refirió que buscando el instrumento a través del cual, bajo los parámetros o porcentajes que pueden participar los ciudadanos, los servidores públicos se van a sentir satisfechos en el refrendo popular que se va a dar precisamente para que pueda continuar con su actividad.

Señaló que es importante cuidar que la revocación de mandato no se vaya empatar con un proceso electoral como sucede en Ecuador, país en el cual la revocación de mandato se solicita en el primer año de ejercicio del cargo o un año antes de finalizar éste, por lo que enfatizó se debe cuidar este aspecto porque de lo contrario esto sí podría incidir tentativamente en las campañas políticas y desde luego influir en el propio electorado, señaló que debe precisarse también para efectos de que los ciudadanos pueden tener mayor información, porque el ambiente que genera un proceso electoral desvía la atención de lo que es precisamente el trabajo que ha desarrollado un servidor público, y haciendo referencia a que todos los días los ciudadanos estamos evaluando nuestros servidores públicos, puntualizó que las redes sociales son un instrumento también que ayuda a medir la simpatía de los servidores públicos, por lo que propuso que se hiciera viable que estos instrumentos colaboren en la mayor información en el ejercicio de este tipo de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que llevan a una mejor rendición de cuentas de los servidores públicos

De esta manera concluyó señalando que no se debe tener miedo con la implementación de esta figura, sino por el contrario señaló que es una gran oportunidad que tengamos este tipo de instrumentos porque incluso tanto los órganos electorales locales llevarán a cabo la organización como los tribunales electorales locales determinarán en su momento si las consultas se llevaron a cabo conforme a lo que establece la propia ley, con lo cual desde su perspectiva se está consolidando el federalismo desde lo local.

Una vez concluidas las intervenciones de los ponentes, se dio lugar para que los asistentes participaran mediante una serie de preguntas y/o reflexiones sobre el tema expuesto. Al respecto, se hicieron los siguientes planteamientos:

Uno de los asistentes celebró este tipo de iniciativas, asimismo, señaló que eventos como el de parlamentos abiertos fortalecen la democracia participativa y resaltó el hecho de que se tome en cuenta a la sociedad para dar sus puntos de vista.

Asimismo, se preguntó respecto ¿a quién va dirigida la revocación de mandato? y ¿en qué momento se pondría a discusión la del jefe de Estado –Presidente de la República–? y el ¿cómo se mediría la efectividad de la política pública de un funcionario?

Otro asistente preguntó si ¿para el servidor que se le instaura el procedimiento de revocación existe alguna medida precautoria una vez iniciado el mismo? Al respecto se deben de separar las dos figuras que son el juicio político y la revocación de mandato, esta última no es un acto de sancionar ante una presunta falta grave como se puede dar en el juicio político de un servidor público, puesto que en el caso de la revocación de mandato es el hecho de que los ciudadanos tienen la oportunidad de evaluar dentro de un periodo que se determine bajo un procedimiento con reglas claras y previamente establecidas para que el servidor público sepa cómo se encuentra frente a su electorado, respecto a si el electorado tiene simpatías por el servidor en relación al trabajo realizado y que así la revocación de mandato es una forma de conocer y evaluar al servidor público y no de castigo.

Donde el servidor público se somete a una evaluación, y no se le pone en el banquillo de los acusados, pero si en la antesala de la evaluación de conocer cómo se ha manejado en la actividad del ejercicio del poder, lo que es contrario al juicio político, donde es un procedimiento que se lleva a cabo dentro de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, señaló que la revocación de mandato puede incluso abrir la puerta al juicio político.

Resulta pertinente hacer notar que en los últimos tiempos no sólo ha empezado a ganar terreno y adquirir carta de naturalización en la región una de las figuras prototípicas de los denominados mecanismos de democracia directa², la de la revocatoria del mandato, sino que incluso la legislación de tres países la prevé expresamente para el mayor cargo de representación popular, la Presidencia de la República.

En efecto, en Bolivia, Ecuador y Venezuela es reconocida y está garantizada constitucionalmente la posibilidad de que la permanencia en el cargo del presidente se pueda someter a consulta del electorado durante su ejercicio. Para activar este mecanismo se requiere, tanto en Bolivia como en Ecuador, que la moción esté respaldada por al menos el 15% de las personas inscritas en el registro electoral; pero mientras que en Bolivia sólo se puede solicitar una vez que ha transcurrido la mitad del periodo de gestión, en Ecuador es suficiente que haya transcurrido un año desde su inicio. En Venezuela la solicitud tiene que ser avalada por un 20% de los electores registrados y también tiene que haber transcurrido al menos la mitad del mandato.³

En la consulta los electores deciden si están satisfechos o no con la forma en que el presidente está ejerciendo sus atribuciones o desempeñando su papel; si el veredicto es favorable, continúa en funciones hasta el final de su periodo, pero si es adverso lo que procede es su destitución y la puesta en práctica del procedimiento previsto para designar o elegir a su sucesor.⁴

En la consulta los electores deciden si están satisfechos o no con la forma en que el presidente está ejerciendo sus atribuciones o desempeñando su papel; si el veredicto es favorable, continúa en funciones hasta el final de su periodo, pero si es adverso lo que procede es su destitución y la puesta en práctica del procedimiento previsto para designar o elegir a su sucesor.

Los profesores José Ignacio Martínez y Francisco Zúñiga han señalado que la razonabilidad en el Derecho supone "*analizar si las soluciones a los conflictos de relevancia jurídica son o no 'razonables', o sea, si las 'razones' que hay detrás de aquellas son o no ajustadas a la razón, y no producto de meras apreciaciones*

² Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Direct Democracy: The International IDEA Handbook [Manual de IDEA Internacional sobre Democracia directa] (Suecia: IDEA Internacional, 2008); 241 pp.; ; García Campos, Alán, "La revocación del mandato: un breve acercamiento teórico", en Quid Juris, Año 1 Vol. 1 (Chihuahua, México: Tribunal Estatal Electoral del estado de Chihuahua, 2005) pp. 25-40

³ Estudios Electorales en Perspectiva Internacional Comparada. Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina. Segunda edición ajustada: Agosto de 2016 © Instituto Nacional Electoral Coordinación de Asuntos Internacionales Viaducto Tlalpan Núm. 100, Col. Arenal Tepepan C.P. 14610, México, D.F. www.ine.mx. P. 22.

⁴ Idem

*subjetivas reactivas a sentimientos, impresiones o gustos personales"*⁵.

Demandar que la consulta sea "razonablemente explicitada" es hacer un llamado al sentido común y excluir el absurdo al momento de solicitar o determinar su procedencia. Deben existir, en buenas cuentas, razones de hecho y de derecho que justifiquen su procedencia. En armonía con ello, siempre se requerirá una *"respuesta satisfactoria, una buena respuesta, una respuesta capaz de convencer o, cuando menos, una respuesta razonable, sostenible, susceptible de resistir la comparación con otras respuestas también posibles, de generar, en consecuencia, amén de la adhesión de una parte de los miembros de la comunidad, la neutralidad del resto, de modo que, si existe alguna oposición activa, esta sea más bien marginal y, por lo tanto, inocua"*⁶.

Es el caso del llamado "voto programático" es un mecanismo de democracia participativa mediante el cual los ciudadanos que votan, imponen como mandato al que eligen el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado en la respectiva campaña electoral. Esto implica necesariamente que los ciudadanos deben conocer los programas de gobierno que los candidatos proponen, como por ejemplo, los proyectos y las ideas que el candidato estima implementar en caso de que resulte elegido. Es común escuchar en campaña, "me la jugaré por un hospital", "las pensiones son indignas", "donaré la mitad de mi sueldo", "haremos un camino", "me la jugaré por que lleguen empresas que den trabajo" "despediré a todos los malos funcionarios". Muchas de esas cosas a veces no se pueden cumplir en un periodo de gobierno, otras no dependen del cargo al que se está postulando y otras definitivamente no se pueden cumplir de parte del candidato (a) que lo propone.⁷

Ego Montecinos explica que finalmente el voto programático, es una herramienta que facilita la modernización de la cultura política, al fortalecimiento y madurez de los procesos electorales y para diseñar campañas asentadas en la realidad más que en la liturgia o en las falsas expectativas que promueven candidaturas que no pueden cumplir lo que prometen. Por otra parte, los propósitos del aspirante encuentran su base en la viabilidad, ya que permite que los candidatos se midan en sus promesas de campaña, es decir, evita que dichas promesas se transformen en estrategias electorales y puedan ser efectivamente una hoja de ruta respecto de lo que van a hacer si llegan a ser

⁵ Martínez Estay, José Ignacio; y Zúñiga Urbina, Francisco (2011): "El principio de la razonabilidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en Estudios Constitucionales, Año 9, N° 1, 2011 (Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca) pp. 199-226.

⁶ El inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N° 19.880 dispone, entre otras cosas, que las *"resoluciones contendrán la decisión, que será fundada"*. ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. Chile.

⁷ ¿Qué es y para qué sirve el voto programático?. www.noticiaslosrios.cl › Opinión 16 jul. 2017 - Por Egon Montecinos Montecinos Doctor en Ciencias Políticas. Egon Montecinos M. ¿Ha escuchado hablar del Voto programático?. Fecha de consulta: 1 de julio de 2019.

elegidos, permitiendo a su vez a la ciudadanía hacer un seguimiento respecto de cómo está haciendo su gobierno en relación a los compromisos contraídos. Finalmente, contribuye a la educación cívica, ya que obliga al candidato a prometer lo que el cargo le permite, y no cosas que están fuera de su alcance o corresponden a otro poder del Estado. Cada elección es una oportunidad para que podamos ejercer nuestro derecho a voto, pero también nuestro derecho a aprender y a mejorar nuestra democracia. Esta es una vía y una buena alternativa para ello.⁸

La LEY 131 DE 1994, por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones en Colombia, se precisa en el artículo 1°. En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por Voto Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura.

De acuerdo a International IDEA, la revocación de mandato es “un procedimiento de democracia directa que permite a la autoridad apropiada y / o a un número específico de ciudadanos exigir un voto para el electorado sobre si un titular electo de un cargo público debe ser removido de ese cargo antes del final de su mandato.” Se trata pues del mecanismo institucional para dejar sin efecto –y de forma anticipada– el mandato otorgado a un servidor público por la vía de las urnas. En este sentido, la revocación de mandato se presenta como un mecanismo de *accountability* o responsabilización vertical a disposición de la ciudadanía mediante el cual pueden sancionar la actuación de sus gobernantes.

IV. Tutela Procesal

En la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 Y SUS ACUMULADAS 16/2017, 18/2017 Y 19/2017, se estableció que las entidades federativas en general y la Ciudad de México en particular tienen libertad para configurar su régimen interior siempre y cuando con ello no contradigan el contenido de la Constitución Federal ni restrinjan los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México. Consecuentemente, en la medida que no haya alguna disposición en la Constitución Federal o tratado internacional que expresa o implícitamente la obligue a adoptar un esquema determinado, y que el diseño institucional local no acarree por sí mismo la vulneración de un derecho fundamental o principio constitucional, cada entidad

⁸ ¿Qué es y para qué sirve el voto programático?. www.noticiaslosrios.cl > Opinión 16 jul. 2017 - Por Egon Montecinos Montecinos Doctor en Ciencias Políticas. ¿Ha escuchado hablar del Voto programático?. Fecha de consulta: 1 de julio de 2019.

federativa puede innovar y distinguirse tanto del régimen de gobierno que tienen las demás como del de la Federación. Ninguna de estas limitantes a la libertad configurativa de las entidades federativas se actualiza en el presente caso.

Primero, en los términos en que está prevista la revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad, no representa un medio para fincar una sanción que se pueda ubicar en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos que regula el Título Cuarto de la Constitución Federal. Se trata más bien de un mecanismo de democracia participativa o semi-directa que busca empoderar a la ciudadanía capitalina frente a sus representantes para efectos de mejorar la calidad de los servidores públicos que ocupen puestos de elección popular. En la medida que permite a los habitantes de la Ciudad de México involucrarse más en la toma de decisiones públicas y en la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades locales electas, la revocación de mandato se enmarca en el proceso gradual de empoderamiento ciudadano en la capital al que nos hemos referido con anterioridad.

Al incorporar la revocación de mandato en la Ciudad de México se pretendió que sus autoridades rindieran cuentas frente a la ciudadanía capitalina y que ésta se involucre más en los asuntos públicos de la Ciudad a través de dicho mecanismo, tal y como dispone la Constitución Federal. El inicio del procedimiento no está ligado a la comisión de algún tipo de conducta ilegal, sino simplemente requiere que una vez transcurrida la mitad del periodo, un diez por ciento de la lista nominal de electores lo solicite a la autoridad competente. No busca, por tanto, imponer sanciones o penas adicionales a los supuestos ya existentes de responsabilidad ni mucho menos reglamentar las disposiciones del Título Cuarto de la Constitución Federal. Tan es así, que en las discusiones que desembocaron en la incorporación de esta figura a la Constitución capitalina se descartó explícitamente adoptar causales como las establecidas en los procedimientos de responsabilidad.

En el SUP-REC-55/2018 se realizó el estudio, en plenitud de jurisdicción, donde la Sala Superior consideró que, ante la ausencia de normativa local, la terminación anticipada del mandato es un tema de materia electoral que puede ser revisado por las autoridades electorales, siempre que la fuente de la revocación o terminación anticipada del mandato derive de un procedimiento de decisión como ejercicio del derecho de autogobierno a través del voto de las comunidades indígenas. Por último, esta Sala Superior decide que, en el caso concreto, aunque la comunidad del municipio sí puede terminar anticipadamente el mandato de las autoridades electas por sus sistemas normativos internos, lo cierto es que la asamblea de terminación de mandato y electiva que se celebró no cumplió con la idoneidad de la convocatoria, porque no se convocó

ni precisa ni explícitamente para ello, ni se garantizó la audiencia efectiva de las personas que resultaron depuestas.

El conflicto electoral extraordinario en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, se origina porque se celebró una Asamblea General Comunitaria en el municipio en la que se determinó la terminación anticipada de mandato de las autoridades del ayuntamiento para dar paso a la elección de diversas personas. Ese conflicto se enmarca en un municipio con población indígena que se rige por su propio sistema normativo interno y se ubica en la región de los valles centrales de Oaxaca. Ese conflicto tiene sus primeros antecedentes en la elección ordinaria celebrada en dos mil dieciséis.

Revocación de mandato: sustitución vs. ejercicio de democracia directa. La revocación de mandato es un término indefinido. Una primera acepción de este concepto puede entenderse como destitución por responsabilidades de los servidores públicos electos popularmente. Una segunda acepción, puede entenderse como un mecanismo de participación ciudadana de democracia directa en la que la decisión es la terminación o no anticipada del cargo para el que fueron electos, a través del sufragio, libre e informado.

Una primera distinción, es que la revocación de mandato es una institución de democracia directa. La democracia directa comprende aquellas formas de participación política que se realizan a través del ejercicio del voto directo de la ciudadanía⁹. Por su parte, la destitución es un mecanismo de democracia representativa; a diferencia de lo que sucede en la democracia directa, en estos mecanismos de la democracia representativa, la ciudadanía delega el proceso de toma de decisión a los representantes electos (por ejemplo, a las legislaturas locales).¹⁰

En ambos casos el resultado final es que se concluye de forma anticipada con el cargo de algún funcionario, sin embargo, los mecanismos suelen distinguirse a partir del procedimiento y los sujetos que intervienen en el mismo. La distinción es importante porque algunos mecanismos de democracia directa han sido considerados como procesos, en principio, electorales por esta Sala Superior¹¹, pues requieren que la

⁹ Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Diccionario Electoral, IIDH, San José C.R., 2017, Tomo II, p. 984 y Zovatto, Daniel. Las instituciones de democracia directa en Nohlen, Dieter et. al. (comps.). Tratado de derecho electoral comparado en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2007, pág. 134; y Altman, David. Democracia Directa en el continente americano: ¿autolegitimación gubernamental o censura ciudadana? en Política y Gobierno, Vol. XII Año 2005, pág. 215. Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. Disponible para consulta en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60327291001>

¹⁰ International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Direct Democracy. The International Idea Handbook, International IDEA, Suecia, 2008. p. 109 y García, Alan. La revocación del mandato: Un breve acercamiento teórico en Quid Iuris, Año 1, Volumen 1, pág. 25. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible para consulta en: <https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/view/17286/15495> . 29 Ver sentencia SUP-REC-6/2016 y acumulado

¹¹ Ver sentencia SUP-REC-6/2016 y acumulado.

ciudadanía, generalmente, participe de forma directa en el proceso a través del voto y, por lo tanto, deben respetar los principios de libertad y legitimidad en las elecciones (libertad, certeza, secrecía del voto, transparencia rendición de cuentas, etcétera).

La revocatoria de mandato como mecanismo de democracia directa requiere, al menos la intervención ciudadana ya sea para votar a favor o en contra de la decisión, o bien, para solicitar que la autoridad lleve a cabo el procedimiento y decida respecto a la revocación, por lo tanto, se distingue entre dos formas de revocación de mandato¹²:

a) Completa, en la cual la ciudadanía participa y está involucrada en todo el proceso, desde la solicitud o iniciativa de revocación hasta la aprobación o no de la misma a través de sus votos; y b) Mixta, en la cual la ciudadanía solo interviene ya sea en la solicitud o en la aprobación, pero no en ambas. En este caso se discute solamente la revocación de mandato completa, donde la ciudadanía se involucra de forma directa y a través del sufragio universal en todo el proceso, al ser enteramente una materia electoral. En el caso de la mixta, la materia electoral solamente correspondería a la aprobación a través del sufragio libre y directo. Procedimiento y causales para la revocación de mandato derivado de mecanismos de participación democrática directa. La distinción sobre las causas del inicio del procedimiento da lugar a otras, por ejemplo, los momentos en los que pueden iniciarse los procedimientos respectivos. Un rasgo característico de la regulación que se ha observado sobre la revocación de mandato es que no puede iniciarse en cualquier momento, ya que el plazo para iniciar el procedimiento suele estar acotado¹³.

Se señala en la sentencia que generalmente no puede iniciarse en una fecha próxima al inicio de su mandato, de forma que el representante electo tenga oportunidad de desplegar su actividad de gobierno durante al menos una parte de su encargo y, por otra parte, a veces se encuentra restringida hacia el final del encargo. La diferencia radica en las causas por las que puede iniciarse uno y otro procedimiento.

Si en el caso de la revocación de mandato la causa es la pérdida de confianza, es claro que el funcionario público debe haber ejercido su cargo durante un periodo determinado, de forma que la ciudadanía cuente con información suficiente para evaluar su gestión. Por su parte, se puede considerar que tampoco se justificaría iniciar ese procedimiento en fechas cercanas a las elecciones ordinarias, porque no se

¹² International Institute for Democracy and Electoral Assistance, op. cit. pág. 114

¹³ Eberhardt, María Laura, op. cit. pág.108 y Franco-Cuervo, Ana Beatriz. Colombia: instituciones líderes políticos y abstención electoral (1991-2013) en Welp, Yanina y Serdült, Uwe (eds.). La dosis hace el veneno: Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza, Instituto para la Democracia del CNE, Quito, Ecuador 2014, pág. 60.

justificaría incurrir en los costos (económicos y sociales) de llevar a cabo una revocación de mandato, si el representante electo puede ser reemplazado en elecciones ordinarias. Por su parte, el procedimiento de destitución previsto en la Constitución no prevé un periodo en el que pueda iniciarse, porque las causas por las que puede iniciarse el procedimiento implican violaciones a la ley que se consideren graves. Tales causales pueden y deben ser perseguidas en cuanto la autoridad tenga conocimiento de ellas y no están acotadas a ningún momento en específico.

En conclusión, la Sala Superior consideró que la revocación de mandato es competencia de las autoridades electorales para revisar los procedimientos en los que 1) la ciudadanía participa de manera directa y decisora sobre la terminación; 2) el procedimiento es a través del voto libre e informado. De esta forma, ese procedimiento es revisable enteramente por las salas de este Tribunal Electoral, como autoridad especializada para conocer de asuntos electorales, en términos del artículo 99 de la Constitución, porque implica el derecho de decisión democrática a través del voto de un electorado determinado.

Lo anterior cobra especial relevancia en las comunidades indígenas. Aunque podría considerarse que la terminación anticipada del mandato de sus autoridades es un ejercicio de sus derecho político-electoral de autogobierno y autodeterminación, previsto en el artículo 2º constitucional, y esta Sala Superior tiene competencia para resguardar esos derechos. Sin embargo, en estos casos de comunidades indígenas no puede equipararse sin mayores argumentos a las figuras estatales de revocación de mandato, sino que debe tratarse como una institución propia de los sistemas normativos internos, que persigue como fin un cambio anticipado y pacífico de gobernantes.

La Sala Superior consideró que las comunidades indígenas tienen la facultad constitucional de crear y ejecutar procedimientos de terminación anticipada o revocación del mandato de sus autoridades. Como punto de partida, las normas constitucionales imponen que el orden jurídico mexicano tiene la característica principal de basarse en un pluralismo jurídico. En ese orden de ideas, la Sala Superior ha considerado necesario, tratándose de conflictos de comunidades y pueblos indígenas, valorar el contexto en que surgen, a fin de definir claramente los límites de la controversia jurídica puesta a consideración de las autoridades electorales y resolverla desde una perspectiva intercultural, atendiendo tanto a los principios o valores constitucionales y convencionales como a los valores y principios de la comunidad.¹⁴

¹⁴ SUP-JDC-1011/2013 y acumulado, y SUP-JDC-1097/2013.

Con esta forma de entender los problemas se ha procurado favorecer el restablecimiento, en su caso, de las relaciones que conforman el tejido social comunitario, desde una perspectiva intercultural integral en que los miembros de la comunidad y las autoridades propician y participan en la solución de la controversia, distinta a la concepción tradicional de la jurisdicción como una relación entre "ganadores" y "perdedores" sobre la determinación de un tercero imparcial.

En el caso concreto la Sala Superior estimó que existen dos características relevantes del caso que hacen suficientes que la Asamblea General Comunitaria de seis de agosto de dos mil diecisiete sea nula, a saber, que no fue convocada de manera explícita y específica para revocar el mandato de las autoridades municipales y para elegir unas nuevas autoridades. Ello da lugar a una vulneración a los principios constitucionales de certeza, participación libre e informada, así como la garantía de audiencia que deben regir en este tipo de asambleas.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia la palabra gobernar tiene diferentes acepciones como mandar con autoridad o regir algo; dirigir un país o una colectividad política; guiar y dirigir; manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él, entre otras; en ese sentido gobernabilidad significa de acuerdo a la misma fuente cualidad de gobernable o gobernanza, que es un arte o manera de gobernar.¹⁵

Por ende, gobernar implica dirigir la vida pública en virtud de un mandato constitucional el acatamiento de decisiones públicas que están integradas por intereses parciales y por un conjunto de actores que presionan al gobierno para que las acciones que en su caso soliciten se apliquen en el marco de lo que se ha denominado conflicto de interés.

De tal suerte, la acción gobernar implica conocer cómo se definen los compromisos de gobierno que deben de cumplirse en un país o en una comunidad. De tal suerte que la gobernabilidad implicará un conjunto de condiciones que ajustadas, propiciarán la capacidad de gobernar y dar legitimidad para desempeñar el cargo.

En este contexto, la gobernabilidad exige una atención permanente de los órganos de gobierno y de sus instituciones o dependencias públicas y sociales, por tanto, dentro de ese proceso de gobierno y ciudadanía, se exige al poder público la respuesta inmediata

¹⁵ <http://www.rae.es/rae.html/> fecha de consulta: 7 de junio de 2019.

a las necesidades de la sociedad.

Es importante señalar que la gobernabilidad se rige por principios y se regula por normas, los primeros dan lugar a la legitimidad para llevar a cabo la toma de decisiones. Principios como legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y certeza, propician que el gobernante actúe en su función como un garante de los derechos de los ciudadanos.

En cambio al regularse por normas la gobernabilidad, representa el respeto al Estado de Derecho, al sometimiento del régimen jurídico, tanto constitucional como legal, dentro del cual se le otorgan a la autoridad facultades pero también obligaciones. De allí entonces la importancia de la palabra gobernar con sentido social y democrático.

Ahora bien, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la palabra gobernanza implica el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.¹⁶

La gobernanza se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

Sin duda, dentro de la administración pública este modelo constituye un medio para elevar el contenido democrático toda vez que dicho enfoque puede incentivar la participación y la confianza de la ciudadanía a través de la creación de estructuras participativas estrechamente vinculadas con la vida cotidiana de los ciudadanos, sobre todo, porque la participación y la capacidad de este sector puede influir en el gobierno.

En el caso mexicano, las gestiones públicas han presenciado una constante interacción de diferentes agentes políticos, la llegada a las administraciones estatales y municipales de partidos de oposición ha dinamizado la participación ciudadana.

Con ello, la función pública ha adquirido un carácter más plural, abierto y dinámico de la función pública, al menos en el sentido electoral. Sin embargo, para la propia funcionalidad de la gestión pública, se requiere de un proceso de democratización más allá del sufragio.

¹⁶ <http://www.rae.es/rae.html/> fecha de consulta: 7 de junio de 2019.

No obstante, con estos procesos de democratización se ha puesto de manifiesto también una crisis de legitimidad en las estructuras administrativas. A mayor democracia, mayores son los cambios que presenta un país, puesto que la democracia no sólo representa una redistribución del poder político, sino de una readecuación del poder económico, político y social.

La participación democrática en los procesos políticos de un pueblo implica una tendencia histórica creciente de acceso al poder y a los factores que posibilitan su ejercicio por parte de cada vez más ciudadanos, grupos, clases y regiones.

Es por eso que hoy en día la tendencia de los miembros que conforman una sociedad deben estar convencidos de que sólo en el respeto de los derechos y de la observancia a la ley permitirá lograr los acuerdos y consensos necesarios para el buen desarrollo de un Estado democrático.

Es de esta manera, que en este trabajo abordaremos un tema que nos permite analizar un nuevo fenómeno social en el que se ve involucrada la democracia. Esto es las competencias ciudadanas, las cuales, permiten a los ciudadanos tomar parte en las decisiones importantes en las que se les involucra, de allí la importancia por tratar este tema.

Un factor social fundamental para la democracia es la existencia de una cultura política de participación, discusión informada y respeto al punto de vista ajeno. Es posible que exista una sociedad en que se manifieste tal tipo de cultura política en estado puro. Por ende, es importante señalar que esta dimensión fundamental de los fenómenos culturales más amplios, a la escala de un pueblo, se produce y desarrolla históricamente, y a la escala de cada individuo se aprende.¹⁷

Las competencias ciudadanas son las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, cuyos conocimientos y actitudes, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.

No es otra cosa que ser capaces de responder a las necesidades de la colectividad, del entorno en que se desenvuelve el ciudadano, ser competente, entendida la competencia como la aptitud para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.¹⁸

¹⁷ KROTZ, Esteban, (Coordinador) *El Estudio de la Cultura Política en México (Perspectivas disciplinarias y actores políticos)*, Cultura política y medios de difusión: educación informal y socialización, SÁNCHEZ RUÍZ, Enrique E., ed. Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1996, p. 254.

¹⁸ <http://www.rae.es/rae.html>/ fecha de consulta: 7 de junio de 2010.

Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos y comprendan la pluralidad como oportunidad y riqueza de la sociedad, tanto en su entorno cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como en su comunidad, país o a nivel internacional.

Las competencias ciudadanas tienen una semejanza con la llamada educación informal, la cual ha sido descrita como el proceso de toda la vida por el cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, habilidades, actitudes y comprensión a partir de la experiencia diaria y mediante la exposición al medio ambiente (en casa, en el trabajo, en el juego; del ejemplo y actitudes de la familia y amigos; de los viajes, leyendo periódicos y libros; escuchando la radio o viendo cine y televisión). Generalmente, la educación informal es desorganizada y con frecuencia sistemática; sin embargo, ésta da cuenta de la gran mayoría del aprendizaje total de cualquier persona en el transcurso de su vida, con independencia de que tenga un alto grado de estudios.¹⁹

Las competencias ciudadanas se trabajan desde los ámbitos temáticos relativos a la construcción de la convivencia y la paz; la participación y responsabilidad democrática y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

Cada uno de estos grupos representa una dimensión fundamental de la ciudadanía y por este motivo, se encuentran articulados en el marco del respeto, la promoción y la defensa por los derechos humanos.

Aquí salta la pregunta ¿qué quiere decir enseñar ciudadanía? podemos señalar que es enseñar conocimientos que permitan fundamentar racional y argumentativamente la convivencia democrática, el estado de derecho, la participación política, la responsabilidad social, la búsqueda del propio bien y la solidaridad.²⁰

Las instituciones educativas no son los únicos espacios apropiados para la formación de las competencias ciudadanas. Esta formación puede y debería ocurrir también en la familia, a través de los medios de comunicación y en otros espacios de socialización. Sin embargo, las escuelas son lugares privilegiados porque, entre otras razones, son pequeñas sociedades en las que los estudiantes pueden poner en práctica las

¹⁹ Ibidem, pp. 255 y 256. La educación no formal, indica Sánchez Ruíz, “es cualquier actividad educativa organizada, sistemática, llevada a cabo fuera del marco del sistema formal para proveer de tipos selectos de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto de adultos como de niños”, en cambio la educación formal, indica el autor, se “refiere al sistema educativo institucionalizado, graduado cronológicamente y jerárquicamente estructurado, es decir, al sistema escolar y sus instituciones tradicionales.

²⁰ CULLEN, Carlos A., *Autonomía moral, participación democrática y ciudadano del otro*, Ed. Ediciones Novedades Educativas, México, 1996, p. 37

competencias ciudadanas que estén aprendiendo, además del ejercicio democrático.

Siguen teniendo validez las palabras de Eugenio María de Hostos de que “... sin educación del pueblo no habrá jamás verdadero pueblo; y que, sin pueblo verdadero, la democracia es una palabra retumbante, no un sistema de gobierno” y de que “no hay pueblo cuando no se cumplen en el individuo los fines que lo fortalecen ante el Estado y en sí mismo” pues la democracia es “absoluta autonomía de la persona humana”.²¹

Por tanto, las competencias ciudadanas se pueden definir como el conjunto de habilidades que desarrolla el ser humano, desde el pensamiento y desarrollada con emociones, que transmitidas, brindan conocimientos y actitudes que, estrechados hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva dentro de la sociedad.

Las competencias ciudadanas hacen posible que todos los ciudadanos contribuyan de manera activa a la convivencia pacífica, ordenada y coherente en su manera de actuar, además su participación responsable permite la mejor construcción del andamiaje democrático, respetando en todo momento la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno, como en su comunidad o en el ámbito internacional, siendo críticos a los distintos fenómenos que se presentan.

En el contexto de las competencias ciudadanas, explica Enrique Chaux,²² se trata de poder desarrollar esas habilidades, la capacidad de relacionarse con otros, de construir una sociedad más pacífica, en la que se acepten las diferencias y podamos vivir y construir a partir de esas diferencias. Una sociedad más democrática en la que todos puedan participar en la toma de decisiones sobre lo que ocurre, así como en la construcción de las normas que nos guían, para lo cual es indispensable comprender su sentido y la manera de participar en su construcción.

Las competencias ciudadanas son el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos respeten y defiendan los derechos humanos, contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen

²¹ BORDA DE SAÍNZ, Jo Ann. “El desarrollo del pensamiento filosófico en Eugenio María de Hostos.” Julio César López, ed. *Hostos: Sentido y proyección de su obra en América*. Río Piedras: Instituto de Estudios Hostosianos; Universidad de Puerto Rico, 1995, p. 87.

²² CHAUX, Enrique, “¿Qué son las competencias ciudadanas?”, marco conceptual publicado en la página de internet Colombia aprende, La red del conocimiento, <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-96635.html>. (Consultada 12 de octubre de 2007). Profesor e investigador en el Centro de Investigación y Formación en Educación, Cife, y el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.

responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respeten y valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como en su comunidad, país o a nivel internacional. En resumen, las competencias ciudadanas se refieren a saber interactuar en una sociedad democrática.²³

La formación ciudadana implica el fomento de una cultura política que estimule la participación cívica y civilizada, así como el respeto a los derechos humanos, a las diferencias culturales y a las minorías, tanto en el ámbito público como privado, en un marco de justicia y libertad. Para ello, es tarea esencial de la educación, ya sea formal o informal, proveer a la población tanto del conocimiento de los principios que dan a la democracia, sus valores, su evolución histórica, como habilidades y destrezas que estimulen su disposición a participar y a involucrarse en los asuntos públicos.²⁴

La educación ciudadana implica el desarrollo de los conceptos, las actitudes y las destrezas que se requieren para ser un miembro activo, reflexivo, crítico y responsable de un pueblo que busca organizarse permanentemente como comunidad política democrática. Esto requiere, por un lado, del estudio del carácter histórico y estructural de dicha comunidad, de los principios políticos que la animan, de las fuerzas sociales que la sostienen, de la distribución del poder en la misma, etc. y su identificación afectiva con la misma, es decir, el desarrollo de un sentido de identidad nacional o patriotismo.

Una competencia es una capacidad para entender, sentir y actuar, es decir una forma de conciencia. Toda competencia supone pues una base de conocimientos o cultura para entender, un sistema de actitudes y valores para sentir y tender a la acción, y un sistema de destrezas para actuar.

Lo anterior lo encontramos en la obra de Cullen quien señala que “enseñar ciudadanía, no es legitimar un orden social dado, ni es tampoco descreer escépticamente de su propia transformación. Es enseñar la participación democrática como modo de construir una ciudadanía responsable y solidaria, es decir: una convivencia justa”.²⁵

Hay que entender que podemos encontrar metas comunes y que nos podemos poner de acuerdo en la forma de conseguir lo que queremos, precisa Chaux, aprender a manejar

²³ Ídem, Los conocimientos se refieren al manejo de cierta información, mientras que las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales, como por ejemplo identificar distintas consecuencias que podría tener una decisión.

²⁴ GUEVARA NIEBLA, Gilberto, Democracia y Educación, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 7.

²⁵ CULLEN, Carlos A., *Autonomía moral, participación...*, pp. 39,40.

las situaciones en las cuales los intereses de uno aparentemente están en contra de los de otros, por lo cual surgen conflictos. Hay que manejar esos conflictos sin violencia, encontrando acuerdos de beneficio mutuo, sin vulnerar las necesidades de las otras personas, convirtiéndolos en oportunidades para el crecimiento. La idea de este trabajo es, en parte, identificar esas competencias para que en la institución escolar y en el resto de ámbitos sociales se puedan desarrollar y trabajar".²⁶

Lograr este cometido requiere tener la oportunidad de participar en las decisiones que atañen a todos, "para que se pueda reflexionar sobre lo que pasó, sobre los efectos que produjo la decisión, entender las razones por las que se actuó de determinada forma, porque es una negociación entre mis intereses y los de la otra persona". Es una negociación que hay que aprender a hacerla todos los días y encontrar el beneficio general.²⁷

En este sentido es necesario interpretar la demanda social en términos de una ciudadanía democrática participativa, equipada lo suficiente con principios y conocimientos, como para hacerse cargo responsablemente del estado de derecho, no reduciendo la participación únicamente a la elección de representantes para el gobierno, sino también buscando formas de organización social y de control ciudadano de las decisiones públicas, que permitan poner en vigencia, real y efectiva, los principios del orden democrático: igualdad ante la ley y de oportunidades reales, la división de poderes, la publicidad (y por lo mismo, la crítica) de las acciones de gobierno, la vigencia plena de los derechos humanos civiles y sociales.²⁸

Conclusiones

La acción ciudadana está mediada por el contexto. Los individuos actúan dentro de estructuras y contextos sociales, y esas estructuras y contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de las competencias.

El diálogo efectivo institucionalizado en todos los niveles es la norma de funcionamiento; presupone que se tomen en cuenta todas las pluralidades y oposiciones, en busca del resultado de su interacción.²⁹

²⁶ CHAUX, Enrique, "¿Qué son las competencias ciudadanas?"...op. cit.

²⁷ JARAMILLO, Rosario, "Programa de Competencias ciudadanas", Asesora del Ministerio de Educación, publicado en la página de Internet Colombia aprende, La red del conocimiento, <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-96635.html>. (consultada 12 de octubre de 2007)

²⁸ Ibidem, pp. 40 y 41. Agrega el autor que "...se hace necesario complementar los principios básicos de un currículum de formación ética y ciudadana"

²⁹ Idem. Se indica en el texto que "si los valores mencionados constituyen la norma ética, la sociedad democrática se organiza de tal forma que las decisiones se adopten al término de un proceso de diálogo institucionalizado en todos los niveles: entre las autoridades estatales pero también en los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas y en toda la vida asociativa.

Es importante dejar claro que no todos los actos hayan de someterse a votación, pues todas las personas no tienen las mismas competencias, pero quiere decir que la solución más razonable y más verosímil sólo puede surgir de un diálogo entre los interesados. Este diálogo representa la verdad que todos procuran alcanzar, bajo la forma progresiva de “solución más razonable”.³⁰

Por otro lado, las competencias ciudadanas no solamente están limitadas por el contexto sino que a su vez pueden contribuir a cambiarlo. Es decir, se espera que las competencias ciudadanas permitan a los ciudadanos contribuir a la construcción de ambientes democráticos, mejorando con ello, los sistemas políticos y garantizando el respeto de los actores políticos en los procesos electorales.

En el orden constitucional mexicano, el derecho al "mínimo vital" o "mínimo existencial", el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123.³¹

Así como al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera.), por lo que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido.³²

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha

³⁰ Ibidem, pp. 139 y 140.

³¹ DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR. Amparo directo 667/2012. Mónica Toscano Soriano. 31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

³² Idem

establecido: "la obligación mínima generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión."

Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales, en su connotación de interdependientes e indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.

Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos, es que su contenido se ve definido, al ser contextualizado con los hechos del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta manera cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso.

V. Fuentes de Consulta

BORDA DE SAÍNZ, Jo Ann. "El desarrollo del pensamiento filosófico en Eugenio María de Hostos." Julio César López, ed. *Hostos: Sentido y proyección de su obra en América*. Río Piedras: Instituto de Estudios Hostosianos; Universidad de Puerto Rico, 1995

CULLEN, Carlos A., *Autonomía moral, participación democrática y ciudadano del otro*, Ed. Ediciones Novedades Educativas, México, 1996, p. 37

CHAUX, Enrique, "¿Qué son las competencias ciudadanas?", marco conceptual

publicado en la página de internet Colombia aprende, La red del conocimiento, <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-96635.html>. (Consultada 12 de octubre de 2007). Profesor e investigador en el Centro de Investigación y Formación en Educación, Cife, y el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.

Eberhardt, María Laura, op. cit. pág.108 y Franco-Cuervo, Ana Beatriz. Colombia: instituciones líderes políticos y abstención electoral (1991-2013) en Welp, Yanina y Serdült, Uwe (eds.). La dosis hace el veneno: Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza, Instituto para la Democracia del CNE, Quito, Ecuador 2014

GUEVARA NIEBLA, Gilberto, Democracia y Educación, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 7.

JARAMILLO, Rosario, "Programa de Competencias ciudadanas", Asesora del Ministerio de Educación, publicado en la página de Internet Colombia aprende, La red del conocimiento, <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-96635.html>. (consultada 12 de octubre de 2007)

KROTZ, Esteban, (Coordinador) *El Estudio de la Cultura Política en México (Perspectivas disciplinarias y actores políticos)*, Cultura política y medios de difusión: educación informal y socialización, SÁNCHEZ RUÍZ, Enrique E., ed. Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1996.

<http://www.rae.es/rae.html>/ fecha de consulta: 7 de junio de 2010.

Martínez Estay, José Ignacio; y Zúñiga Urbina, Francisco (2011): "El principio de la razonabilidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en Estudios Constitucionales, Año 9, N° 1, 2011 (Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca)

Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trad. T. Parsons, (New York: Scribners, 1958)

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Direct Democracy: The International IDEA Handbook [Manual de IDEA Internacional sobre Democracia directa] (Suecia: IDEA Internacional, 2008); 241 pp.; ; García Campos, Alán, "La revocación del mandato: un breve acercamiento teórico", en Quid Juris, Año 1 Vol. 1 (Chihuahua, México: Tribunal Estatal Electoral del estado de Chihuahua, 2005)

Estudios Electorales en Perspectiva Internacional Comparada. Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina. Segunda edición ajustada: Agosto de 2016 © Instituto Nacional Electoral Coordinación de Asuntos Internacionales Viaducto Tlalpan Núm. 100, Col. Arenal Tepepan C.P. 14610, México, D.F. www.ine.mx.

El inciso cuarto del artículo 41 de la Ley N° 19.880 dispone, entre otras cosas, que las "resoluciones contendrán la decisión, que será fundada". ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. Chile.

¿Qué es y para qué sirve el voto programático?. www.noticiaslosrios.cl › Opinión 16 jul. 2017 - Por Egon Montecinos Montecinos Doctor en Ciencias Políticas. Egon Montecinos M. ¿Ha escuchado hablar del Voto programático?. Fecha de consulta: 1 de julio de 2019.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Diccionario Electoral, IIDH, San José C.R., 2017, Tomo II, p. 984 y Zovatto, Daniel. Las instituciones de democracia directa en Nohlen, Dieter et. al. (comps.). Tratado de derecho electoral comparado en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2007, pág. 134; y Altman, David. Democracia Directa en el continente americano: ¿autolegitimación gubernamental o censura ciudadana? en Política y Gobierno, Vol. XII Año 2005, pág. 215. Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. Disponible para consulta en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60327291001>

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Direct Democracy. The International Idea Handbook, International IDEA, Suecia, 2008. p. 109 y García, Alan. La revocación del mandato: Un breve acercamiento teórico en Quid Iuris, Año 1,

Volumen 1, pág. 25. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible para consulta en: <https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/view/17286/15495> . 29 Ver sentencia SUP-REC-6/2016 y acumulado Ver sentencia SUP-REC-6/2016 y acumulado.
SUP-JDC-1011/2013 y acumulado, y SUP-JDC-1097/2013.
<http://www.rae.es/rae.html>/ fecha de consulta: 7 de junio de 2019.
<http://www.rae.es/rae.html>/ fecha de consulta: 7 de junio de 2019.
DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR. Amparo directo 667/2012. Mónica Toscano Soriano. 31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.